



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 2056-2005-PHC/TC  
LIMA  
NANCY MEJÍA RAMOS

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

#### ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Nancy Mejía Ramos contra la resolución emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel, de fojas 80, su fecha 17 de diciembre de 2004, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

#### ANTECEDENTES

Con fecha 7 de setiembre de 2004, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Nacional de Terrorismo, a la cual considera responsable de la violación de sus derechos a la libertad y seguridad personal, así como al debido proceso y a ser juzgada en un plazo razonable. Alega que fue capturada por la policía el 30 de noviembre de 1993, acusada de delito de terrorismo, en mérito a lo cual se le inició proceso en el fuero militar y se le condenó a cadena perpetua, juicio que fue declarado nulo posteriormente, mediante sentencia expedida por la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres el 5 de setiembre de 2002, remitiéndose su causa al fuero civil en el que se le dictó nuevo auto de apertura de instrucción con mandato de detención con fecha 16 de diciembre de 2002, en cumplimiento de la citada sentencia. Agrega que por estar ya más de 11 años detenida, es patente la violación de su derecho constitucional, amparándose para ello en los tratados y legislación internacional pertinente.

La vocal de la Sala Nacional de Terrorismo, doña Enma Benavides Vargas, se apersona y contesta la demanda, a fojas 15, precisando que ésta es infundada, ya que el artículo 137º del Código Procesal Penal, modificado por Ley N.º 27503, de fecha 14 de noviembre de 2001 –y por tanto vigente y aplicable a la situación de la actora– establece que, tratándose de causas en las que se haya declarado la nulidad del proceso seguido en fueros diferentes, no se considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción, debiendo duplicarse el plazo en el caso de delitos como el que es materia del presente proceso.



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de setiembre de 2004, declaró infundada la demanda, estimando que el artículo 137° del Código Procesal Penal, modificado por Ley N.º 27503, establece que, en casos como el de autos, el plazo de detención se extenderá a 36 meses, computables desde el nuevo auto de detención, y que realizado el cómputo, se advierte que este plazo aún no ha fenecido.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

### FUNDAMENTOS

1. El artículo 1° del Código Procesal Constitucional dispone que la finalidad de los procesos constitucionales es la de proteger derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. Asimismo, este cuerpo normativo establece, en su artículo 25°, los derechos que protege este proceso sumarísimo, urgente y excepcional.
2. De autos se advierte que la pretensión de la accionante es que se decrete su inmediata libertad, alegando un posible exceso de detención en su contra. El artículo 4° del Código Procesal Constitucional, en su segundo y tercer párrafos, consagra que el hábeas corpus procede ante vulneraciones de la tutela procesal efectiva, es decir el derecho al libre acceso a los mecanismos procesales que la ley otorga, entre ellos el de la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y la observancia del principio de legalidad procesal penal. Por tanto, cabe a este Tribunal determinar si el plazo legal para procesados bajo detención efectiva se ha cumplido en el caso de la actora.
3. El 13 de noviembre de 2001 se publicó en el diario oficial *El Peruano* la modificación del artículo 137° del Código Procesal Penal, el cual regula la duración de la detención en cada caso específico. Así, en su primer párrafo establece que: “(...) en procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de número igual de personas o del Estado, el plazo límite se duplicará”, lo cual equivale a decir que asciende a 36 meses; asimismo establece en su tercer párrafo que: “(...) el cómputo del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo (...) no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción (...)”. Cabe añadir que, debido a la fecha de promulgación de la citada modificación, esta es aplicable al caso particular de la actora.
4. Por tanto, de autos se tiene que, con fecha 16 de diciembre de 2002 (fojas 40), se inició proceso en la vía ordinaria contra la recurrente, dictándose mandato de detención en su





## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

contra, en aplicación de lo ordenado por la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres, de acuerdo a la instrumental obrante a fojas 10, su fecha 5 de septiembre de 2002, que declaró nulo el proceso seguido en el fuero militar, declaración que seguía una línea interpretativa iniciada por este Tribunal, y que daría paso a jurisprudencia en materia antiterrorista que culminaría con la Sentencia N.º 010-2002-AI/TC, del 4 de enero de 2003.

5. En autos (foja 40 a 45), corre el auto de apertura de instrucción en contra de la demandante, su fecha 16 de diciembre de 2002, del que consta que ésta viene cumpliendo 29 meses y 5 días de detención; por tanto, aún no ha vencido el plazo legal establecido en el artículo 137º del Código Procesal Penal, no advirtiéndose la vulneración de la libertad individual de la accionante. Entonces, es aplicable al caso el segundo párrafo del artículo 4º del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

### HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la demanda de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**GONZALES OJEDA  
GARCÍA TOMA  
VERGARA GOTELLI**

**Lo que certifico:**

**Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra**  
SECRETARIO RELATOR (e)